

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

INFC- 2025/2607

S.J.- 294/2025

Se ha recibido en el Servicio Jurídico en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior una petición de informe en relación con la propuesta de modificación nº1 del contrato denominado «**Póliza de seguro de responsabilidad civil para la flota de vehículos de la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid lote 1: Póliza de seguro de responsabilidad civil de la flota de vehículos de cuerpo de Bomberos y servicios administrativos de la Dirección General de Emergencias**».

A la vista de la legislación aplicable, de los antecedentes remitidos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 b) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 122.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tenemos el honor de emitir el siguiente:

INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.

El día 1 de diciembre de 2025, ha tenido entrada la referida solicitud de informe que viene acompañada de la siguiente documentación:

- a) Propuesta de modificación del contrato firmada por la directora general de Gestión Económica y Personal de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, el 26 de noviembre de 2025.

- b) Borrador de la Resolución de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, por la que se dispone la modificación n.º 1 del contrato que nos ocupa.
- c) Borrador del documento de formalización de la modificación objeto de informe.
- d) Informe económico del modificado n.º 1 del expediente, firmada por la directora general de Gestión Económica y Personal de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 el 8 de octubre de 2025.
- e) Escrito firmado el 9 de octubre de 2025 por la directora general de Gestión Económica y Personal de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 mediante el que se comunica a la empresa contratista OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS la modificación propuesta.
- f) Justificante de envío de la comunicación reseñada en el punto anterior, con fecha de envío de 9 de octubre de 2025.
- g) Acuse de recibo de notificación telemática de la comunicación anterior, la cual consta como aceptada en la indicada fecha, 9 de octubre de 2025.
- h) Escrito de conformidad a la modificación propuesta firmado por la empresa contratista en fecha 25 de noviembre de 2025.
- i) Documento denominado “anuncio modificación”, el cual reproduce íntegramente el contenido del informe económico reseñado en el apartado d).

Examinados tales antecedentes, procede formular las siguientes:

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA. – SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

De conformidad con los artículos 190, 203 a 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP, en lo sucesivo) entre las prerrogativas de la Administración Pública se

encuentra la de modificar los contratos por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente, sin que tales modificaciones puedan afectar a las condiciones esenciales del contrato.

Así, al amparo del artículo 203 de la LCSP:

“1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.

2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.

3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63”.

La ley distingue, pues, entre modificaciones previstas y no previstas en la documentación que rige la licitación. En este caso, se justifica que se trata de una modificación prevista en el pliego, por lo que ha de ajustarse al artículo 204 de la LCSP.

En cuanto al procedimiento, hay que atender a los artículos 191 y 207 de la LCSP.

Expuesto el marco normativo, analizaremos el modificado planteado. Como se colige de la regulación indicada, y así se desprende de las resoluciones de diversos órganos administrativos, (a título ilustrativo, nos referimos al Dictamen 60/25, de 30 de enero de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid), y judiciales (Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 227/2017, de 7 de junio – recurso 140/2015) las modificaciones de los contratos administrativos han de someterse a dos tipos de requisitos: formales y materiales. Estos últimos, relativos a la causa que fundamenta la modificación y al límite cuantitativo.

SEGUNDA. – REQUISITOS FORMALES DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA.

El contrato que nos ocupa se adjudicó el 22 de noviembre de 2019, por lo que resulta de aplicación al presente expediente de modificación la LCSP tanto en los aspectos procedimentales como materiales de la modificación considerada.

En relación con ello, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP, a cuyo tenor, *“dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de (...), modificarlos por razones de interés público (...)*”. Por su parte, el artículo 191.1 de la LCSP requiere que en el correspondiente expediente se dé audiencia al contratista. Además, el citado artículo en su apartado tercero dispone que sea preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva cuando la modificación del contrato no estuviera prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros, circunstancias que no concurren en el presente expediente de modificación. Además, ante la falta de un desarrollo reglamentario en materia de contratación del sector público, debe considerarse aplicable el Reglamento General de la Ley de Contratos de la

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP) que en su artículo 102 dispone que *“cuando sea necesario introducir alguna modificación en el contrato, se redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. La aprobación por el órgano de contratación requerirá la previa audiencia del contratista y la fiscalización del gasto correspondiente”*.

En este caso, consta la propuesta de modificación del contrato y un informe económico justificativo de dicha modificación, firmada el 8 de octubre de 2025, por la directora general de Gestión Económica y Personal de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

En relación con el trámite de audiencia, obra en el expediente el escrito dirigido al contratista dando traslado de la propuesta de modificación del contrato, firmado el 9 de octubre de 2025 por la directora general de Gestión Económica y Personal de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Consta que el contratista prestó su conformidad a la modificación propuesta el 25 de noviembre de 2025.

Por otro lado, por aplicación de lo previsto en el artículo 109.3 de la LCSP, deberá procederse al reajuste de la garantía definitiva, tal y como se recoge en el borrador de documento de formalización del modificado que obra en el expediente.

TERCERA. - REQUISITOS SUSTANTIVOS DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA.

Como es sabido, la posibilidad de modificación de los contratos, por parte del órgano de contratación, es una prerrogativa de la Administración que supone una excepción al principio general de invariabilidad que preside las relaciones contractuales, y en atención a ello, dicha potestad se encuentra reglada en su ejercicio, debiendo someterse a las exigencias y a los límites que impone la legislación, en particular la debida justificación del interés público concurrente.

En este sentido, y en relación con esa prerrogativa de la Administración, es doctrina reiterada de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid (así el Dictamen 543/16, de 1 de diciembre, el Dictamen 439/19, de 30 de octubre y el ya citado 60/25, de 30 de enero, entre otros) que *“el ius variandi está sujeto no sólo a unos trámites procedimentales, sino, además, al cumplimiento de los requisitos y condiciones debidamente justificados de conformidad con la legislación vigente en cada momento”*.

En este caso, la modificación proyectada se justifica en las nuevas adquisiciones de vehículos previstas por la Dirección General de Emergencias y el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Conforme a lo dicho, en el documento denominado propuesta de modificación de contrato, firmado por la directora general de Gestión Económica y Personal de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, el 26 de noviembre de 2025, se explica que *“durante la anualidad 2025, la Dirección General de Emergencias ha previsto la adquisición de 180 nuevos vehículos de prevención y extinción de incendios”* que detalla como 159 vehículos ligeros; 20 furgones y 1 camión. De esta manera, *“la flota prevista para el próximo ejercicio 2026, incluida en la tramitación del presente Modificado, es de 510 vehículos entre remolques, quads, excavadoras, vehículos ligeros, furgones de servicios y camiones”*.

Según la citada propuesta, *“el importe de las pólizas correspondientes a los nuevos vehículos supone un incremento general del importe de adjudicación del contrato inicial suscrito en 2019, que requiere la elaboración de un modificado de aquel expediente para los próximos ejercicios”*.

En relación con ello, el PCAP que rige este contrato recoge en su cláusula 1.21 la posible modificación del contrato *“por incremento del número de vehículos que forman parte de la flota asegurada y siempre que como consecuencia de ello la prima total supere el precio máximo ofertado por el adjudicatario, podrá modificarse el contrato a fin de ajustar la*

adecuada cobertura de la póliza. Dicha modificación no podrá superar el 20% del importe de licitación del contrato”.

Por consiguiente, entendemos que no existe obstáculo jurídico en la invocación del artículo 203.2 a) de la LCSP para justificar la modificación proyectada.

En relación con el límite cuantitativo de la modificación, en el informe económico que obra en el expediente, se desglosa que el importe de la adjudicación del contrato ascendió a la cantidad de 129.948,75 euros y que el importe de la anualidad prevista para el año 2026 es de 154.744,48 euros, por lo que el importe del modificado asciende a la cifra de 24.795,73 euros. Según dicho informe, la modificación planteada, supone un incremento por un porcentaje del 19,08% respecto al contrato original, inferior al 20 % previsto como límite máximo en el PCAP que rige el contrato. De igual modo, dicho porcentaje de modificación respeta el límite establecido por el artículo 204.1 de la LCSP.

En virtud de lo expuesto, procede formular la siguiente:

CONCLUSIÓN

Se informa favorablemente la propuesta de modificación nº1 del contrato denominado **«Póliza de seguro de responsabilidad civil para la flota de vehículos de la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid lote 1: Póliza de seguro de responsabilidad civil de la flota de vehículos de cuerpo de Bomberos y servicios administrativos de la Dirección General de Emergencias».**

Es cuanto se tiene el honor de informar. No obstante V.I, resolverá.

En Madrid, a fecha de firma
**La Letrada jefe del Servicio Jurídico en la Consejería de
Medio Ambiente, Agricultura e Interior.**

Firmado digitalmente por: SANCHEZ SAN MILLAN ANA SOFIA
Fecha: 2025.12.05 13:56

Ana Sofía Sánchez San Millán

**ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR.**